

ANÁLISIS DE LA CRISIS

¿A qué le teme Fidel Castro?

Francisco León

(...) El análisis de las amenazas de una intervención militar norteamericana en Cuba durante el período 1980-1995 y las medidas adoptadas para impedir las o afrontarlas muestra que las denuncias sobre nuevos preparativos para una intervención más no han tenido esta vez una respuesta equivalente de los cubanos. El Gobierno de La Habana ha optado por neutralizar esa amenaza con juicios sumarios y condenas injustas a los opositores y ejecuciones desproporcionadas a tres de los secuestradores de un ferry en el puerto habanero. Al comparar la situación actual con la existente durante las violentas protestas ocurridas en el puerto de la capital en el verano de 1994 y el éxodo de decenas de miles de personas en balsas precarias, se observa que en ambas ocasiones confluyen una crisis económica con la falta de esperanza de una población que busca mejorar sus condiciones de vida. Pero esta vez Fidel Castro pretende evitar la repetición de acontecimientos como los de 1994, amedrentando a sus opositores y a quienes intentan salir del país. Para eso cae en continuas violaciones de los derechos humanos, lo que ha provocado una solidaridad internacional sin precedentes con la oposición pacífica, a la vez que ha interrumpido el diálogo político con la Unión Europea (UE) y con los partidarios de levantar las sanciones económicas dentro de Estados Unidos. Paradójicamente, las inversiones, el acceso a mercados externos y mayores ingresos por comercio y turismo hubieran facilitado el manejo y la superación de la crisis económica actual, algo que sin embargo está siendo obstaculizado por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno cubano.

Desde finales de la década de los 80 y comienzos de la de los 90, en plena crisis terminal del CAME y de la Unión Soviética, Fidel Castro no había vuelto a invocar la amenaza de una intervención militar norteamericana. En aquel entonces, la llamada «guerra de todo el pueblo», que combinaba la apertura de trincheras en muchas localidades del país y la movilización de casi dos millones de efectivos de las milicias territoriales en apoyo del ejército regular, se presentó como la mejor manera de frenar la invasión. Durante el denominado Período Especial, establecido a partir de 1990, se desarrolló la «Opción Cero», que implicaba entrenar a la población para sobrevivir sin agua y energía eléctrica durante muchos días, para así atajar algunas de las consecuencias previstas de una intervención militar o de un bloqueo económico prolongado por parte de Estados Unidos.

Hasta finales del primer quinquenio de 1990, las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe no eran notificadas previamente al Gobierno cubano, que utilizaba esta excusa para justificar sus ensayos de movilización militar y popular de cara a

una posible agresión. Gracias al diálogo entre militares cubanos y norteamericanos, que acordaron que estos ejercicios serían notificados con antelación, Cuba pudo evitar los costes de sus actividades militares preventivas, sumamente sensibles para una economía como la cubana, cuyo PIB se redujo en más de un 40 por ciento por la caída del comercio y el cese de la ayuda financiera del campo socialista, especialmente de la Unión Soviética. En la segunda mitad de la década de los 90, las milicias territoriales fueron progresivamente desmovilizadas y el ejército regular redujo fuertemente sus efectivos, que fueron incorporados, en parte, a la producción. Esto contribuyó a reducir el déficit fiscal, un objetivo importante del programa de estabilización iniciado en 1994-1995.

Coincidiendo con el fin de la guerra en Irak y el agravamiento de la inestabilidad en Oriente Próximo, Fidel Castro denunció nuevamente la amenaza de una intervención militar. Según su propia versión, el responsable de la agresión sería el Jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que mantuvo una serie de reuniones con algunas decenas de opositores al régimen, cuya actuación es pública y pacífica. Sin duda alguna, sólo aquellos convencidos de la centralidad política de Cuba en el contexto internacional pueden creer en la intervención militar denunciada por Castro. Sin embargo, estos creyentes escasean dentro del propio Gobierno cubano y del Partido Comunista y son inexistentes entre los encargados de la seguridad y la política exterior de Washington. Las vagas referencias a la extensión de la intervención militar en Irak a Cuba, hechas por el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, y la reiteración de la decisión de la Administración Bush de promover la democracia en la Isla, formulada por el Jefe de la Sección de Intereses en La Habana durante una conferencia en una Universidad de Miami, lejos de probar la denuncia de Fidel Castro, muestran lo insustancial de sus acusaciones. Quienes así se manifestaron ocupan cargos periféricos en el sistema de toma de decisiones de Washington y confirman la marginalidad de la Isla en la política global estadounidense, ya que la Cuba del nuevo milenio ha dejado de ser un problema geopolítico y de seguridad para Estados Unidos. Actualmente, tanto para los gobernantes norteamericanos como para los aspirantes a la Casa Blanca bastan las promesas de reforzar o levantar las sanciones económicas y de restablecer la democracia en Cuba para atraer el voto y contentar a la opinión pública cubano-americana.

La nueva denuncia de amenaza de intervención militar norteamericana no ha dado lugar, sorprendentemente, a un llamamiento a filas de antiguos miembros de las milicias territoriales, ni a la reincorporación de miembros del ejército regular dados de baja, ni siquiera a ejercicios militares extraordinarios. Como bien señaló José Saramago en un artículo reciente, los juicios sumarios y las condenas a los opositores tampoco fueron acompañados por la expulsión del Jefe de la Sección de Intereses. En cambio, lo que sí es un problema para el Gobierno cubano y recuerda al verano de 1994 es el deterioro económico en todo el Caribe, Cuba incluida, a consecuencia del impacto del 11 de septiembre en los flujos turísticos, agravados en este primer trimestre por los de la guerra de Irak y el estancamiento del crecimiento económico global. En 2002, el Gobierno tuvo que adoptar medidas de drástica cirugía económica, que afectaron a la emblemática industria azucarera, que cerró más de 50 ingenios y redujo su fuerza de trabajo en 200.000 hombres. Los indicadores que

hablan de una pérdida de control económico se han multiplicado en los últimos dos años: el peso cubano vio mermado su valor en más de un 25 por ciento; el mercado negro ha vuelto a crecer y también el desempleo y el consiguiente malestar, sobre todo entre los jóvenes que ingresan al mercado laboral; ha aumentado la dependencia de las remesas de emigrantes que pasaron de 800 a 1.300 millones de dólares anuales. A todo esto hay que sumar el número de personas que intentan escapar de la Isla a toda costa y a cualquier lugar; en siete meses se han producido siete secuestros de barcos y aviones.

Esta situación recuerda a los líderes cubanos los hechos de agosto de 1994 y temen que se repitan. Ese verano, miles de habaneros protestaron con inusual violencia en el puerto de La Habana por el deterioro de sus condiciones de vida y exigieron poder salir del país. La protesta hizo necesaria la intervención de las tropas y la presencia del propio Fidel. Finalmente, las autoridades suspendieron temporalmente los controles de salida ilegal del país, alentando a más de 30.000 personas a atravesar el Estrecho de La Florida en precarias balsas para ganar las costas norteamericanas. Ante la avalancha de inmigrantes ilegales, Estados Unidos respondió recogiendo a miles de ellos en el mar, confinándolos durante más de un año en la Base de Guantánamo hasta que una proporción importante fue finalmente aceptada en Estados Unidos y otra devuelta a Cuba.

Desde un punto de vista de la política exterior cubana, la «crisis de los balseros» culminó en acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, firmados a finales de 1994. Se trata de los primeros y únicos acuerdos sujetos a un seguimiento y revisión periódica. En ellos se establece la concesión de 20.000 visados anuales de entrada a Estados Unidos para ciudadanos cubanos y la devolución de aquellos emigrantes ilegales que no alcanzaran suelo norteamericano o lo hicieran recurriendo a la violencia. Sin embargo, Washington siguió concediendo permiso de residencia a los que llegaban a sus costas o estaban en tránsito a terceros países y eran calificados como perseguidos políticos. Al mismo tiempo, el Gobierno cubano protesta periódicamente por el incumplimiento de las cuotas de visados y, en algunos casos, de la obligación de devolver a aquellos que han secuestrado barcos y aviones. También denuncia frecuente y exaltadamente la norma que concede asilo a los perseguidos políticos, por entender que es la causa principal de la emigración ilegal y del uso de violencia para consumir el objetivo de salir del país.

Desde un punto de vista interno, las protestas en La Habana y el éxodo de los balseros fueron una señal de alerta sobre el grave impacto político de la crisis económica y del deterioro de las condiciones de vida de la población. El Gobierno reaccionó ampliando los cambios iniciados en 1993 (legalización de la tenencia de dólares y libre circulación y vigencia de los mercados campesinos) para controlar el mercado negro y restablecer la capacidad de compra del peso. Entre septiembre de 1994 y finales de 1995 se adoptó un conjunto de medidas que conformaron un programa de reforma y estabilización económica que dio confianza a los inversionistas y empresarios extranjeros, que hasta entonces no habían respondido a los incentivos establecidos desde 1989-1991. El crecimiento del 20 por ciento acumulativo anual en el número de turistas y del ingreso de divisas generado por esta actividad entre 1995 y 2000 fue la piedra angular del círculo virtuoso que comprende

reformas económicas-transformación productiva-asociación Estado/empresa extranjera. Las empresas mixtas hispano-cubanas manejan el 40% de la ocupación turística en la Isla, y España ha sido entre 1990 y 2003 uno de los mayores orígenes de turistas y de fuentes de inversiones en Cuba. La locomotora del turismo fue capaz de dinamizar la producción para consumo interno y arrastrar el carro de la empresa estatal resistente a la des-burocratización.

El diálogo mantenido con el Gobierno de Clinton permitió obtener una mayor liberalización en los viajes a Cuba, el envío de remesas a la Isla y una mejora en las comunicaciones de los cubanos-americanos con sus familiares. En poco tiempo el valor de las remesas de emigrantes sobrepasó a los ingresos provenientes del azúcar, el principal producto de exportación. De este modo, el Gobierno cubano pudo prescindir de los beneficios de un Acuerdo de Cooperación con la UE, rechazando las condiciones de mayor respeto a los derechos humanos y de liberalización política contenidos en la Posición Común europea promovida por España. En cambio, se siguieron ampliando las inversiones, el comercio y los flujos turísticos de muchos de los países miembros de la UE con Cuba. Resumiendo, el diálogo internacional y las transformaciones económicas permitieron al Gobierno cubano hacer frente exitosamente a la desesperanza de la población por el deterioro del nivel de vida y la falta de credibilidad en las promesas del régimen durante la crisis 1989-1994.

En 2003, Cuba ha pasado del estancamiento a la crisis económica y, contra toda lógica, con los juicios sumarios y las condenas a los opositores y secuestradores del ferry habanero se ha dado marcha atrás en el camino recorrido mediante el diálogo político internacional en los últimos 15 años. Teóricamente se trataba del diálogo que permitiría a Cuba romper su aislamiento internacional dadas las limitadas relaciones que mantiene con la UE, Estados Unidos y América Latina. Con la UE esto se produciría al acceder Cuba a participar del financiamiento y acceso preferencial al mercado comunitario, un beneficio mantenido por los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico) firmantes del Acuerdo de Cotonou, que reemplazó al de Lomé. El Gobierno cubano, por boca de su ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque, ha respondido a las protestas de la UE y de sus países miembros con motivo de la reciente ola represiva amenazando con retirar la candidatura formal a la firma de ese acuerdo, presentada en enero pasado. Pérez Roque acusó a la UE de «chantaje» al condicionar su ingreso a Cotonou a la vigencia de las normas de derechos humanos y democratización que rigen todos los acuerdos internacionales comunitarios. En la misma línea, el canciller cubano calificó el «tímido» rechazo europeo a las sanciones económicas impuestas por la Ley Helms-Burton como una muestra de complicidad con Washington. Ésta fue la respuesta cubana al ofrecimiento del comisario Nielsen, en la inauguración de la delegación de la UE en La Habana, en febrero pasado, de apoyar su ingreso a Cotonou y de continuar el diálogo político para avanzar en el respeto de los derechos humanos.

Pérez Roque no ignora el precedente marcado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, que en dos ocasiones anteriores suspendieron el diálogo político y el avance hacia el Acuerdo de Cooperación. Cuba es el único país latinoamericano y ACP que no lo ha firmado, dada la protesta europea ante la imposición de la pena de muerte a opositores políticos (1992) y la negativa (1996) a avanzar en el

respeto a los derechos humanos. El régimen cubano también calculó mal la reacción de España, que en 1996 fue la principal promotora de la Posición Común europea que liga la aprobación del Acuerdo de Cooperación al avance en el respeto de esos derechos, ya que el recrudecimiento de la represión política en Cuba ha unido al Gobierno y a la oposición española en su condena y en la demanda de liberar a los opositores presos. La reacción española se ha repetido en los demás países de la UE, anticipando que esta vez las relaciones entre España y Cuba seguirán una línea similar a la de la Comunidad.

La presente violación de los derechos humanos ha servido para obstaculizar el diálogo con congresistas y empresarios norteamericanos favorables a levantar las sanciones económicas y la prohibición de viajes turísticos a Cuba establecidos en la Ley Helms-Burton. Muchos de ellos han criticado y pedido el cese de todos aquellos actos del Jefe de la Sección de Intereses en La Habana que puedan servir como pretexto de provocación a las autoridades cubanas, pero no aceptan que los mismos justifiquen las violaciones cometidas en base a actos anteriores del propio Jefe. El Gobierno cubano no puede confiar en que el levantamiento del embargo y los mayores ingresos por viajes turísticos de ciudadanos norteamericanos sean, a corto plazo, la alternativa a un deterioro en sus relaciones comerciales y la pérdida de ayuda financiera de la UE a través del Acuerdo de Cotonou.

A diferencia de 1994, en la primavera de 2003, los juicios sumarios y las penas de muerte y prisión, lejos de minar la solidaridad internacional con la oposición interna, la han ampliado. También han alentado la movilización y organización de la sociedad civil cubana. Además, han puesto nuevos obstáculos a las relaciones con la UE y los países miembros y con los congresistas y empresarios partidarios en Estados Unidos de apoyar el levantamiento de las sanciones económicas que hubieran facilitado la superación de la crisis y la desesperanza de la población, a las que teme Fidel Castro más que a la amenaza de intervención militar en Cuba de la que acusa a los norteamericanos.

En medio de la guerra en Irak, el líder cubano ha querido amedrentar a su desesperanzada población y, particularmente, a sus opositores con juicios sumarios y sanciones de largos años de cárcel por actividades públicas y pacíficas en pro de la democratización y el respeto de los derechos humanos y con la pena de muerte a quienes por medios violentos intentan escapar de la Isla. Su equivocación ha sido la de ignorar que las manifestaciones multitudinarias de NO A LA GUERRA en Estados Unidos, Europa y América Latina respondían al rechazo tanto a la decisión unilateral de norteamericanos e ingleses de lanzarse a la guerra, como a las violaciones de los derechos humanos durante la misma y los ocurridos bajo la dictadura de Sadam Husein. La condena a los juicios sumarios y las injustificadas o desproporcionadas penas a los que osaron promover la democracia y los derechos humanos concitaron la solidaridad internacional con los afectados.

En medio de una de las peores crisis económicas que ha padecido Cuba, sus autoridades, sorprendidas por la reacción internacional ante esos hechos, usaron duros términos para descalificar las críticas internacionales y transformaron en intercambio de críticas el diálogo político iniciado con la UE para ingresar al Acuerdo de Cotonou y también con los congresistas y empresarios norteamericanos partidarios

de poner fin a las sanciones económicas. De este modo, se frustra acabar con el aislamiento de Cuba y con su participación en la construcción de un nuevo orden regional caribeño y global. El régimen castrista se escuda en una concepción tan absoluta como a-histórica del principio de no-intervención, que niega todo esfuerzo internacional para avanzar en la universalización del respeto a los derechos humanos y los principios democráticos. Y condena a la población cubana a una mayor carencia de bienes esenciales y al desempleo, aumentando el número de cubanos vulnerables a caer por debajo del nivel de pobreza, y lo hace, erróneamente, en nombre de la libertad y la soberanía nacional, por las que en realidad luchan sus opositores con el respaldo de la Comunidad Internacional.

[<http://www.realinstitutoelcano.org>; 21/4/2003]

Cuba: otro futuro mejor es posible

Juan Antonio Blanco

Fidel Castro ha justificado sus recientes acciones represivas como ineludibles medidas de seguridad nacional. Según La Habana, los yanquis están fabricando una crisis migratoria masiva como pretexto para convertir a Cuba en Irak. La retórica altisonante de Washington y su persistencia en la política de confrontación con La Habana contribuyen a darle credibilidad a las palabras del Presidente cubano pese a que cualquier analista de EE UU podría clarificar que se requiere de una acción sorpresiva y muy grave iniciada por Cuba para que cambien las prioridades de Washington en los meses venideros. Para nadie es secreto que la visión maniquea del mundo de la Administración Bush representa peligros potenciales —no sólo militares— a la seguridad de más de una nación. Pero valdría la pena preguntarse si en el caso de Cuba *todos* los peligros a la gobernabilidad del país provienen del exterior como esos relámpagos que irrumpen en cielo sereno.

Cuando en 1994 tres mil habaneros tomaron el malecón en espontánea explosión contra el gobierno, Fidel — y después de tener engavetadas por más de tres años todo un conjunto de propuestas de funcionarios y académicos aperturistas—, se rindió ante la evidencia: no estaba seguro de que su élite de poder aceptaría que se llegase a reprimir con violencia las crecientes manifestaciones de descontento popular. «Esta guerra hay que ganarla con frijoles, no con cañones» aseguró Raúl Castro. Y vino un tiempo de aperturas tímidas, pero reales. Creímos que «otro socialismo mejor era posible en Cuba». *Se estaba configurando el embrión de una visión diferente y multidimensional de la seguridad nacional.* Pero esa nueva doctrina conducía a una mayor libertad y descentralización del poder con las que Fidel Castro no quería o no podía congeniar.

A mediados de 1995 ya se veían los resultados. El país había reconstituido sus vínculos comerciales con naciones de América Latina, Canadá y Europa. Crecía a más de un 7 por ciento su PIB. Los potenciales balseros iniciaban microempresas con trabajo propio creando riquezas y empleos adicionales. Se oxigenaba la creatividad intelectual y los debates sobre el futuro del país se desplazaban de los tradicionales grupos disidentes a las instituciones y personas comprometidas con una visión alternativa, pero aún socialista. El Presidente Clinton amenazaba con vetar la Helms Burton y mejorar las relaciones con Cuba en su segundo mandato. El país parecía avanzar hacia una reinserción económica mundial, en un ámbito de mayor seguridad en su relación bilateral con EE UU y en una atmósfera de distensión doméstica. Los que entonces éramos un grupo amorfo de funcionarios e intelectuales promotores de estos cambios hacia un nuevo paradigma de desarrollo socialista creímos tener, finalmente, a Fidel Castro de nuestra parte. Imperdonable error.

Otro, fue no entender que a menos que la democracia sea *para todos* —y no sólo para los socialistas— nunca la habrá para nadie. El principio enunciado por Fidel en 1961 —«Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada»— derivó, al institucionalizarse en los 70 el proceso cubano en una sociedad posrevolucionaria, en aquel enunciado por Mussolini mucho antes: «Dentro del Estado todo, contra el Estado, fuera del Estado, nada.»

Castro dijo, años después, habernos escuchado —a nosotros y a muchos amigos aperturistas extranjeros— «con la sonrisa de la Gioconda y la paciencia de Job». Estaba ganando tiempo. A fines de 1995 urdió tres acciones saboteando el rumbo que llevaban las cosas. Primero dispuso que se desmontara de inmediato un canal de comunicación informal —en proceso ya de establecerse— para intercambiar ideas a lo largo de 1996 con la Casa Blanca sobre cómo adelantar la normalización de las relaciones en la segunda Administración Clinton. Después facilitó la deliberada «filtración,» desde su despacho a la tv de Miami, de un video privado tomado por su camarógrafo personal donde algunos exiliados invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano daban supuestas muestras de «excesivo afecto» hacia su persona durante una recepción, en torcida maniobra para sabotear todo futuro diálogo *real* con esa traumatizada y por ello polarizada comunidad. Luego ordenó a su servicio de inteligencia que Juan Pablo Roque —infiltrado desde hacía años en la organización Hermanos al Rescate— regresara de inmediato a Cuba. Roque había informado que el 24 de febrero de 1996 avionetas de Hermanos al Rescate volarían sobre territorio cubano para lanzar proclamas antigubernamentales. Las avionetas no estaban artilladas, no llevaban bombas y sus pilotos estaban desarmados. Fidel Castro, que lo supo todo de antemano, ordenó a sus MIGs atacarlas en pleno año electoral en EE UU. Hecho curioso, porque nunca ha ordenado disparar contra los vuelos que la Fuerza Aérea y Naval de EE UU han realizado de manera sistemática sobre Cuba desde 1962.

Cuba tuvo suerte. Clinton rechazó la opción de bombardear bases militares cubanas que le fue presentada y se resignó a firmar la Helms-Burton contra la cual había luchado hasta entonces. Fidel obtuvo lo que necesitaba. Primero realineó a los militares, que, a fin de cuentas, sólo querían imitar el «modelo chino» y ya andaban preocupados por lo que creían era una excesiva autonomía y libertad de pensamiento de los funcionarios civiles e intelectuales. Luego, en el V Pleno del Comité Central, en marzo de 1996, conminó a los presentes a aprobar un extenso documento que, lejos de reconocer los éxitos alcanzados como resultados de las tímidas aperturas ya experimentadas, alertaba sobre una gran conspiración del imperialismo con una «quinta columna» de académicos, intelectuales y funcionarios «blandengues.» La «quinta columna» a la que se refería entonces —a diferencia de la que hoy cree ver en los 75 disidentes pacíficos recientemente encarcelados— estaba integrada por militantes comunistas que creían en la posibilidad de un rumbo socialista alternativo para el país. Enfrentados con hechos consumados, envueltos en la patriotería fabricada en torno a la aprobación de la Helms-Burton, —y sin conocer todos los detalles detrás del derribo de la dos avionetas—, Fidel Castro obtuvo, una vez más, la «obediencia debida» de su clase política. El Programa del V Pleno del cc, aprobado en pocas horas por varios cientos de altos dirigentes, congeló esencialmente hasta

hoy el alcance del proceso de aperturas y reformas. Poco después se legisló una Ley Mordaza de naturaleza extraterritorial para silenciar a los ciudadanos cubanos, dentro y fuera de Cuba. La misma que ahora se usó para enjuiciar y encarcelar a los 75 disidentes a penas que suman más de mil cuatrocientos años de prisión.

Los resultados están a la vista: la economía en crisis, deterioro social creciente, corrupción generalizada y el fin de toda ilusión. El socialismo de estado fue identificado como «único socialismo posible» y declarado legalmente inmutable, hasta la eternidad.

Lo triste es que los EE UU no necesitan hoy de una gran conspiración para fabricar una nueva crisis migratoria. Fidel Castro la viene fabricando desde que reimpuso su peculiar doctrina de la seguridad nacional en el V Pleno del CC en marzo de 1996. Pudiera todavía evitarla anunciando el retorno de Cuba al proceso de reformas, en lugar de reactivar —como ya hizo— el paredón de fusilamiento. Es esto lo que los amigos de Cuba —aquellos que desean cerrar las vulnerabilidades de este país ante una eventual intervención militar externa— deberían exigir al Presidente cubano junto con la inmediata liberación de todos los presos de conciencia.

Después de la caída de la URSS, la justicia social y la seguridad nacional sólo podrán ser preservadas con el pleno ejercicio de las libertades y derechos políticos y civiles que los propios revolucionarios cubanos han reclamado de sus dirigentes más de una vez a lo largo de estas cuatro décadas. Es por ello que el silencio acerca de lo que ocurre en Cuba, lejos de ser un acto de solidaridad, se torna complicidad tácita con los represores del ideal libertario del proyecto revolucionario cubano. Complicidad que lejos de obstruir facilita una intervención extranjera que puede intentar legitimarse en la insatisfacción de la población provocada por un régimen que asfixia sus libertades y proyectos de futuro sin proveer ya ninguno.

Los amigos sinceros *del pueblo* cubano deberían reflexionar sobre el hecho de que si bien resultan loables los sistemas universales de salud y educación de la Isla, otros similares caracterizaron los regímenes de Stalin, Mussolini, Hitler y Franco. La Revolución cubana representó en los 60 del pasado siglo la promesa de llegar a casa, finalmente, la justicia social con la libertad, pero Fidel Castro la introdujo en un juego geopolítico —quizás inevitable entonces— que terminó sepultando la Revolución y su promesa. El extrañamiento entre la justicia social y la libertad, en el marco de una sociedad que ya era posrevolucionaria, era viable por el apoyo soviético, pero ya no lo es. Hoy hay que optar entre el apoyo al ideal democrático y libertario del proyecto revolucionario original o extender el respaldo *incondicional* —Fidel Castro no admite menos— al paisaje institucional represivo del régimen totalitario que traicionó aquellos y que ahora pone cada vez más en peligro la seguridad e independencia nacionales. No hay que escoger entre Fidel y Bush. Hay mejores opciones.

Siempre existe más de un futuro posible. Es la acción humana la que obstruye o facilita el advenimiento de uno u otro. Fidel Castro pudo haber recibido a la Administración Bush con una economía nacional reinsertada en la mundial y consolidada en su recuperación, una nación vital, creadora de riquezas, y una intelectualidad comprometida con el país —no con sus abusos— pero prefirió otro futuro. El que hoy se hace presente. Incluso ahora prefirió sabotear, una vez más, a todos los que denodada y honradamente trabajaban en Cuba y EE UU por el levantamiento del embargo.

La visión totalitaria del socialismo y el estilo unipersonal de gobierno de Fidel Castro son hoy —mucho más que cualquier posible acción estadounidense contra Cuba— los principales peligros a la seguridad nacional cubana. Sin embargo, es a la clase política, a sus intelectuales y al pueblo en general a los que correspondería —antes que a nadie— ponerle coto definitivo y salvar al país. Es necesario hacerlo antes de que sus erráticas y a menudo unilaterales acciones conduzcan a todos a un desastre de dimensiones desconocidas. Otro futuro mejor todavía es posible y el pueblo cubano lo merece.

[<http://www.realinstitutoelcano.org>]

Cuba: Mito y realidad

Marifeli Pérez-Stable

(...) Aunque hace rato que la revolución pasó a la historia, no sucede lo mismo con su distintivo cuasi mítico de baluarte del nacionalismo y la equidad. A principios de los años 60, la soberanía ganada ante EE UU y los avances en justicia social forjaron en los cubanos un vínculo afectivo tan fuerte que incluso hoy, cuando en Cuba no queda ni rastro de lo que fue —o prometió ser— la revolución, aún sienten su ascendencia algunos sectores de la población. Sólo el empecinado diferendo con EE UU permitió al régimen rodearse del aura de David y retener, si no simpatías, sí un cierto perfil internacional. Pareciera que las desmesuradas sentencias a 75 opositores no violentos y las ejecuciones sumarísimas de tres secuestradores constituyen un parte aguas entre los efectos residuales del mito revolucionario y la realidad de la dictadura que azota a Cuba.

En cierto modo, la represión reciente se desmarca de los casos más notorios de los últimos 15 años: el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia y otros dos oficiales en 1989; el hundimiento del remolcador «13 de marzo» en 1994, con 41 muertos (10 de ellos menores de edad); el derribo de dos avionetas en aguas internacionales (según lo estableció la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU) con cuatro víctimas mortales; y la represión rutinaria a la oposición mediante la intimidación, el hostigamiento, la arbitrariedad y el encarcelamiento.

Los fusilamientos de 1989, aunque sacudieron a Cuba, fueron un *affaire* de la élite. Entrañaban riesgos, pues mostraron una fisura en la cúpula del poder que pudo haber sido fatídica. Entonces agonizaban la URSS y la Europa del Este, China se había enfrentado a la Plaza de Tiananmen y se avecinaba la derrota electoral del sandinismo en Nicaragua. Cuba encaraba una crisis latente —por el estancamiento de su economía y, sobre todo, por el agotamiento de la ciudadanía—, pero la contuvo. Precisamente, la capacidad de la élite para mantenerse cohesionada ha sido una de las razones de su perdurabilidad.

En julio de 1994, el «13 de marzo» fue usurpado por un grupo de personas que intentaba salir de Cuba; las autoridades lo interceptaron y lo hundieron. Si se hubiera efectuado un sondeo en aquel momento, éste hubiera registrado un casi seguro repudio abrumador al hundimiento. ¿Cómo no iba a conmoverse a la opinión pública si millones de cubanos habían contemplado la idea de irse del país y 750.000 solicitarían la salida a la Sección de Intereses de EE UU? Al hundimiento le sucedieron dos hechos notables: el «maleconazo» del 5 de agosto, cuando miles de personas se congregaron en el litoral habanero por el rumor de que se aproximaban

embarcaciones para trasladar a la Florida a todo el que quisiera y, al no aparecer, vocearon consignas anti-gubernamentales; y la estampida de 35.000 cubanos devenidos en balseros después de que el Gobierno abriera las costas para la libre emigración. Estos sucesos destacaron el poder de convocatoria de la migración en la ciudadanía y en las relaciones EE UU-Cuba. En septiembre, los dos Gobiernos acordaron un pacto migratorio que facilitó la entrada anual a EE UU de hasta 20.000 cubanos.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate —organización del exilio que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en busca de balseros y ocasionalmente el territorio cubano para arrojar pasquines de apoyo a la oposición— fue un factor que determinó la aprobación de la ley Helms-Burton en su versión más dura. Hasta entonces, el proyecto languidecía en el Congreso de EE UU, y sus partidarios buscaban revivirlo diluyendo los acápites más fuertemente objetados por Europa y América Latina. Sin embargo, una Helms-Burton *light* no le convenía a Castro porque no reforzaba su imagen de víctima ni acallaba a los que desde el Gobierno pedían reformas más contundentes. Durante la primera mitad de los años 90, La Habana aplicó algunas medidas para frenar el colapso económico, pero no todas las indicadas para afrontar la nueva realidad internacional ni para mejorar los estándares de vida. Aunque a mediados de 1995 Castro declaró concluidas las reformas, sectores de la élite seguían insistiendo discretamente sobre las mismas. La ampliación de la apertura económica y la relajación de las tensiones internacionales eran —y son— dos caras de la misma moneda.

Hasta los últimos arrestos y condenas, el régimen había tolerado el crecimiento de la disidencia y de la sociedad civil independiente. Mientras se sintiera confiado en mantener la situación interna bajo control, esa suerte de liberalidad le permitía manejar en sus relaciones exteriores el tema de los derechos humanos. En 1999, el régimen hizo la vista gorda cuando prominentes opositores se reunieron con dignatarios extranjeros presentes en la Cumbre Iberoamericana de La Habana. La tolerancia no era tal, ya que quienes perdían el miedo y actuaban como si fueran libres eran hostigados de mil maneras, vivían a la sombra del poder arbitrario y con la permanente amenaza de la cárcel. Sin embargo, en los años 90, las sentencias habían sido leves, aunque injustificadas por tratarse de personas condenadas por razones de conciencia. A principios de 1999, se proclamó la ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que establecía altísimas condenas —ahora aplicadas— por emitir opiniones consideradas contrarias a la soberanía y los intereses nacionales.

A pesar de su reciente desarrollo, la oposición abierta no representaba un peligro inmediato para el Gobierno. Con profundo desprecio, el oficialismo tildaba de «grupúsculos» a la miríada de organizaciones de la sociedad civil, y finalmente el poder arbitrario sacó las garras y les dio un zarpazo que, si no mortal, los ha debilitado de cara al futuro próximo. Sin embargo —aunque lejos de movilizar recursos suficientes como para retar efectivamente al régimen—, la oposición se erigía en una fuerza política con futuro. Así lo reconoció el presidente Carter cuando mencionó al Proyecto Varela en su discurso en la Universidad de La Habana el año pasado, algo imposible si este esfuerzo y otros paralelos no constituyeran plataformas políticas incipientes. No fue por ser un simple ciudadano con el valor de sus convicciones la razón por la que la Unión Europea le otorgó a Oswaldo Payá el Premio

Sajárov para la Libertad de Pensamiento. Como el referéndum que declaró irrevocable el socialismo en Cuba hace casi un año, la reciente ola represiva es una muestra de debilidad. El desarrollo de la oposición contribuyó a los tristísimos sucesos (junto a la actuación inoportuna del representante de EE UU en La Habana), pero lo determinante fue el contexto más amplio del Gobierno y de la sociedad cubana.

La reciente ola represiva no se desmarca de los patrones de violencia —potencial o ejercida— del régimen cubano desde sus inicios. Incluso cuando la revolución estaba en su apogeo, en Cuba y en el mundo, el Gobierno se consolidó sobre los cadáveres de miles de fusilados, decenas de miles de presos políticos, cientos de miles de exiliados y el «insilio» —el destierro al silencio de quienes se quedaron y se oponían a la plataforma que desde entonces pasa por política: lealtad trinitaria e indivisible a Cuba, a la revolución y al máximo líder—. Desde el principio, esta plataforma era intrínsecamente fallida al no permitir, siquiera dentro de sus filas, la diversidad y el pluralismo propios de cualquier proyecto humano.

Ni entonces ni ahora la dirigencia cubana ha titubeado para mantenerse en el poder. La diferencia radica en que en los años 60 había un gran apoyo popular y ahora no. El país revolucionario entonces entendía la represión como una medida defensiva para derrotar a la contrarrevolución; hoy, los ciudadanos de a pie —los que fueron revolucionarios y los hijos y nietos de los que lo habían sido— conocen de cerca el poder represivo del régimen y saben que no son libres. Si la consolidación a toda costa fue una causa compartida con millones de cubanos, la defensa a ultranza del poder en los términos actualmente definidos por la máxima dirigencia no lo es. Por eso los fusilamientos del 11 de abril son espeluznantes: aunque la mayoría no contemplara unirse a la oposición organizada, sí lo ha hecho respecto a la salida del país. Los fusilados eran simples ciudadanos de un barrio pobre de La Habana, y como ellos hay millones en Cuba. Otras medidas recientes sobre salud pública y tráfico de drogas han avalado un despliegue pretoriano e inevitables registros en los hogares. Estos registros evidencian las ilegalidades necesarias para la supervivencia diaria y recuerdan a todos el alcance de los tentáculos oficiales. La ola represiva de marzo y abril ha subrayado el abismo psicológico entre el «nosotros», que alguna vez abarcó a la dirigencia y al pueblo, y el «ellos», que ahora la ciudadanía aplica al régimen.

Aunque también es una advertencia a los cubanos de a pie, la represión contra la oposición resulta consustancial al régimen. Tras el colapso de Europa oriental y la desaparición de la URSS, la dirigencia cubana se enfrentó al reto de cómo gobernar su país. Personas sensatas, dentro y fuera de Cuba, aconsejaron una liberalización —pausada pero decidida— que permitiera un aterrizaje suave tras la Guerra Fría. China y Vietnam mostraban la eficacia de una reestructuración económica que simultáneamente guardaba el control político. Las reformas puestas en marcha fueron insuficientes para las necesidades del país, aunque estabilizaron la economía y el poder logró reconstituirse. Se celebraron dos congresos del Partido Comunista: el de 1991 intentó soplar ligeros aires de apertura, y el de 1997 cerró filas. A fines de 2002 debió haberse celebrado otro congreso, pero no fue así y aún sigue sin fijarse su fecha.

El aparato partidista, pensando en la celebración del congreso el año pasado, estableció comisiones para estudiar (de nuevo) la legalización de las pequeñas y medianas empresas nacionales, la agilización de las inversiones extranjeras y otras

medidas económicas, así como una reforma institucional que fortaleciera el sistema judicial. Si bien las medidas son escasas para una Cuba democrática, estos esfuerzos suponen un programa de gobierno que apunta a cierta normalidad para el país y sus relaciones internacionales. Un amago de normalidad sería la mejor garantía —si es que existe alguna en política— para la sucesión ineludible del comandante en jefe. Pero éste se ha emperrado en impedirlo y lo ha conseguido.

A Castro le es más fácil gobernar desde las crisis y el enfrentamiento que desde la normalidad. Así lo ha demostrado durante 45 años y así lo hará hasta su muerte. «Ni un minuto menos», dijo hace poco refiriéndose a su plazo en el poder y a la comprensión ganada sobre su destino, que «no era venir al mundo para descansar al final de la vida». En su horizonte nunca estuvo negociar con la oposición, ni darle aire a los que desde la propia élite tienen posturas opuestas a las suyas. Congeladas las reformas desde 1995, Castro desató la llamada Gran Batalla de Ideas en 2000 que implicó frecuentes movilizaciones de «apoyo popular», un zumbido propagandístico casi constante y un atrincheramiento nacionalista. Esa es su plataforma de gobierno, si bien es dudoso que la mayoría de la élite —aunque asiente en público— comparta su entusiasmo.

El contexto interno fue determinante para los sucesos de los últimos meses. ¿Cómo convocar el congreso del Partido si era imposible afrontar la reestructuración económica? La guerra de Irak fue propicia al acaparar la atención internacional, pero, aun sin ella, se acercaba al momento de las definiciones. Así ha sido la política en Cuba desde 1959. Durante los años sesenta, primó un patrón movilizador que desarticuló la economía y malgastó la confianza ciudadana en la revolución. Le sucedió la llamada institucionalización, que intentó aplicar normas económicas y políticas otras vigentes en el campo socialista, que mejoró el consumo cotidiano y relajó las presiones políticas. A mediados de los años 80 se abortaron los impulsos de esta incipiente normalidad y hubo un retorno parcial al modelo movilizador. Desde 1990, la supervivencia ha sido primordial y se han adoptado algunas reformas sin que el ciclo normalizador echara raíces, pese a que buena parte de la dirigencia así lo deseara. Para Castro, el socialismo de mercado —en la variante húngara antes de 1989 o la seguida actualmente por China y Vietnam— es casi tan deleznable como el capitalismo.

Se habla del inmovilismo de la Cuba oficial. No era así a principios de los años 90, cuando se discutieron —en su mayor parte a puerta cerrada— numerosas propuestas para afrontar la nueva realidad. Esas discusiones promovieron reformas a medias que frenaron el colapso económico y, por consiguiente, la voluntad de proseguir con los verdaderos cambios. Después del congreso de 1997, la dirigencia daba tumbos para que todo siguiera igual —gatopardismo tropical— hasta que el caso de Elián González le proporcionó a Castro el ropaje ideológico del inmovilismo. Las movilizaciones impulsaron la Gran Batalla de Ideas, que ha sitiado a la política cubana con una retórica cada vez más desentendida de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, las medias reformas se fueron agotando, la economía volvió a estancarse y personas sensatas de la élite retomaron la idea de profundizarlas. Se trata de políticos que saben que la demanda popular más sentida y urgente es la economía. A fines de 2001, el congreso del Partido comenzó a planearse pensando en una nueva ronda de reformas.

Castro era la piedra en ese camino, y no se quitó para que el Partido realizara su congreso. Los preparativos de la visita de Carter, la propia visita y sus secuelas monopolizaron las energías de la dirigencia. La mención que hizo Carter del Proyecto Varela los cogió desprevenidos y los forzó a dar una respuesta impensable sólo por la presentación de firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular unos días antes. En junio, el espectáculo del referéndum oficial y la enmienda a la Constitución sellaron supuestamente la irrevocabilidad del socialismo. Además de ser una respuesta tácita a los varelistas, las movilizaciones asentaron el estilo frenético que mejor cuadra al liderazgo del comandante. En agosto, la dirigencia proyectó a la militancia un extraño vídeo explicando la expulsión del Partido del defenestrado Roberto Robaina y que aludía al igualmente destituido Carlos Aldana. Los preparativos para el congreso se atascaron. Éstos podrían avanzar ahora porque los sucesos de 2002 y lo que va de 2003 han restringido las posibilidades de la élite moderada. Las condenas y los fusilamientos son un viraje en la política cubana que no se sabe a dónde van a conducir. Sobre los hombros de la dirigencia —incluyendo el sector moderado— cae la responsabilidad de estos hechos. La situación interna y las relaciones internacionales de Cuba son hoy más tensas que nunca. Para aliviarlas, no queda otro remedio que volver a las reformas, pero el escenario no lo permite.

Castro siempre ha resistido la racionalidad económica (también la política), y sólo ha cedido —en los años 70 y a principios de los 90— cuando no quedaba otro remedio. En ambas ocasiones, tiró de las riendas antes de que las reformas se afincaran. Con casi 77 años, Castro debería descansar y dejar vivir a los cubanos. Ha declarado que no lo hará y, a no ser que la élite se le enfrente, el panorama es sombrío. ¿Podría el Ejército convencer al comandante —como a principios de los 90— de volver a las reformas? Es posible, pero ahora sabemos que los términos medios no bastan, y dar marcha atrás es hacerlas de verdad. En febrero, Castro viajó a China y regresó «asombrado». Unos días después fueron destituidos casi todos los miembros del equipo económico que estaban entre los principales defensores de una reestructuración. De persistir el camino actual, el régimen podría afrontar una revuelta popular que forzaría la orden de disparar contra el pueblo. ¿Se mantendrá la élite cohesionada hasta que Castro pase a mejor vida?

(...) En lo relativo a la relación entre EE UU y Cuba hay que señalar que la actuación de la Sección de Intereses en La Habana fue provocadora, pero de ninguna manera la causante de las condenas y fusilamientos. Es lo que Castro pretende que el mundo crea, y así lo dijo en su comparecencia televisiva del 25 de abril cuando los achacó a «una conspiración urdida por el Gobierno» de EE UU y «la mafia terrorista de Miami», a la par que proclamó que «a las autoridades cubanas no se les puede atribuir responsabilidad alguna». Para combatir las condenas prácticamente universales, el régimen habla de los planes subversivos contra Cuba que supuestamente trama la Administración Bush. Algunos «amigos de Cuba», que firmaron cartas o hicieron declaraciones contra la ola represiva, han denunciado el «peligro» que corre la Isla ante EE UU.

No es fácil lograr que razonen los creyentes extranjeros que ven a Washington apuntando a Cuba ahora que Irak cayó. El unilateralismo de la Administración y la retórica de sus ideólogos no conducen a la medida. La incontrovertible y obsesiva

historia de cuanto hicieron las diferentes Administraciones estadounidenses por revertir la revolución, predispone a muchos a creer cualquier cosa de Washington en relación con La Habana. De nada sirve que Rumsfeld y Powell hayan dicho *on the record* que no hay tales planes de agresión. Si bien no se puede afirmar tajantemente que EE UU nunca intervendría en Cuba, hay que vivir en otro planeta para creer que en estos momentos se trata de una posibilidad real. La lista de desafíos del pos-Irak es larga y Cuba no figura en ella con prioridad alguna.

Lo que está en duda no es una guerra contra Cuba, sino la cancelación de las remesas y los vuelos directos. Sería fútil hacerlo, pues cuando lo hizo Clinton después del derribo de las avionetas en 1996, los cubanos de EE UU viajaban y enviaban remesas por terceros países sin que el peso de la ley cayera sobre ellos. No obstante, se espera que el 20 de mayo (cuando se conmemora la fundación de la República), la Administración Bush anuncie algunos cambios para sancionar a Cuba por las condenas y los fusilamientos. Lo inteligente sería no hacer nada y dejar que sean otros países los que se encarguen —cosa que ya ocurre— de lidiar con Cuba. Algunos en Washington, fuera del Gobierno, han sugerido que lo realmente ingenioso sería concertar una política con la Unión Europea y América Latina para que EE UU levante el embargo y ellos apliquen presiones agresivas en favor de la transición. La audacia radicaría en forjar una política que efectivamente demuestre un compromiso militante y casi intransigente del mundo occidental con la democratización de Cuba. Si a medio plazo tal política se lograra, daría el tiro de gracia al mito revolucionario y desnudaría en plena luz del día la dictadura que azota a Cuba.

Ante cualquiera de las alternativas posibles —no hacer nada, recrudescer algunas medidas o concertar una política osada con la UE y América Latina— EE UU debe mantener la calma. La situación interna en Cuba es tal que Castro bien pudiera provocar un enfrentamiento por medio de una crisis migratoria o de algún otro suceso difícil de prevenir. Nunca se debe perder de vista que un final tremebundo no es ajeno a su psicología ni a la manera en que ha ejercido el poder durante 45 años, en particular si se viera realmente arrinconado.

[<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis; 8/5/2003>]

Ni Guerra Fría ni Muerte

Cuba y el cambio en los intelectuales de izquierda

Iván de la Nuez

En el otoño de 2002, Steven Spielberg visitó La Habana por dos días. Aunque en los últimos años el Papa ha oficiado misa allí y el ex presidente James Carter ha hablado de democracia; los Orioles de Baltimore han jugado al béisbol y Kevin Costner ha recreado con Fidel Castro la crisis de los misiles, varios congresistas de Estados Unidos han reclamado el fin del embargo y Arnold Schwarzenegger se ha fumado un puro, ha tenido lugar la primera feria de productos norteamericanos y Sara Montiel se ha casado, la de Spielberg no fue una visita cualquiera. Al contrario, representó un espaldarazo mediático para la Revolución, otra voz que pedía el fin del embargo de Estados Unidos, un ramalazo de aire fresco para la atribulada vida cotidiana de la isla. Los mejores cines acogieron, por esos días, la filmografía del director norteamericano y los habaneros vivieron una renovada fantasía. De repente, la Habana se convirtió en una ciudad acechada por *Tiburón*, enternecida por *ET*, entristecida por *El color púrpura*, desconsolada por los judíos de *La lista de Schlinder*, angustiada por *El arca perdida*. Como colofón, el estreno de *Minority Report*, cuya clave fundamental es la anticipación: en un mundo posdemocrático (año 2054), la presunción de inocencia ha dado paso a la certeza de la culpabilidad, los delincuentes son detenidos antes y no después de cometer un crimen, la disidencia en minoría es eliminada en nombre de la unanimidad. Menos de un año después de la visita del también llamado Rey Midas de Hollywood, Cuba no quedó convertida en oro, pero sus autoridades tampoco esperaron hasta el año 2054 para presumir la culpabilidad de 75 opositores pacíficos, entre ellos el reconocido poeta Raúl Rivero, y dictar contra ellos un total de 1454 años de prisión. Eso no fue todo, pocos días después de las detenciones, fueron fusilados tras un juicio sumarísimo, tres jóvenes que habían secuestrado una embarcación de pasajeros para escapar a Estados Unidos.

Las detenciones, los fusilamientos, los procesos sumarios, no ocurrieron ciertamente en el mejor de los mundos, sucedieron al mismo tiempo que la invasión desatada por Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak y en paralelo a la protesta mundial más intensa de las últimas décadas contra una guerra. Si bien esa guerra ha sido consignada como el primer gran conflicto de la era global, Cuba y Estados Unidos se han enzarzado, por enésima vez, en un enfrentamiento más propio del último coletazo de la Guerra Fría. Desde esa perspectiva, previa a la caída del Muro de Berlín, Fidel Castro había sabido mover sus piezas entre los bandos enfrentados en los tiempos de la Cortina de Hierro. Frente a Estados Unidos tuvo la astucia de aliarse con la Unión Soviética; ante la Unión Soviética supo coquetear con China;

contra el poscolonialismo del primer mundo tuvo la capacidad de liderar a los Países No Alineados; en contrapunto con los partidos comunistas de América Latina se permitió alentar a las guerrillas. Todo esto le proporcionó un éxito nada desdeñable, a partir de dos estrategias muy precisas: en primer lugar, la combinación de su disidencia internacional en nombre de la diversidad con la anulación de la disidencia interna en nombre de la unidad. En segundo término, la utilización —quizá como nadie durante la Guerra Fría— de la temeridad como un arma de la diplomacia. Mientras mayor era el enemigo —y el de Cuba ha sido sin duda uno de los mayores contendientes que puedan imaginarse en el siglo xx— más dura ha sido su diatriba y más absoluta su voluntad retórica de soberanía frente a él. Esta destreza política le permitió a Fidel Castro mantener a la Revolución, y a sí mismo, en el poder durante casi medio siglo y le ofreció rentas indiscutibles durante toda la Guerra Fría. Ahora, ante los estremecimientos del nuevo orden global, sus cálculos no han tenido la precisión de otros tiempos. El ruido estridente de la guerra en Irak y el clamor de la multitud en contra de la política norteamericana, no alcanzaron suficientes decibelios como para que la comunidad internacional pasara por alto lo sucedido en La Habana y respondiera, ante las detenciones y los fusilamientos, con una contundencia inédita. El repudio a estos hechos por parte de intelectuales de la izquierda así como el rechazo de varios partidos comunistas y socialdemócratas europeos, representan un punto de giro que no debe subestimarse. Günter Grass y Hans Magnus Enzensberger, José Saramago y Susan Sontag, Pedro Almodóvar y Manuel Vázquez Montalbán, Noam Chomski y Carlos Fuentes, Josep Ramoneda y Antonio Tabucchi, entre más de un centenar de escritores y artistas de primera línea a los que nadie en su sano juicio puede descalificar como agentes pagados por la CIA, se opusieron a la guerra de Irak tanto como se opondrían a una invasión norteamericana a Cuba, pero consideraron perfectamente coherente manifestarse también contra el autoritarismo, la detención de disidentes y los fusilamientos, aunque provinieran de un régimen socialista; acaso más por provenir de él.

¿Era necesario fusilar a tres secuestradores que no cometieron delitos de sangre para mantener la soberanía nacional de Cuba? ¿Era imprescindible dictar sentencias de 20 años por delitos de opinión, como ha sucedido con el poeta Rivero? Y el hecho de condenar estos actos, ¿presupone el aval para una invasión norteamericana que tendría consecuencias nefastas para la isla y en general para el hemisferio latinoamericano?

Estas preguntas no han dejado de flotar sobre estos días y si bien el equipo gobernante de Estados Unidos es de los más agresivos que se recuerden en las recientes administraciones, no resulta convincente que la supresión de 80 personas de la vida pública —y de la vida a secas— garantice nada semejante. ¿O es que acaso la represión sistemática de Sadam evitó la guerra?

En política no hay inocencia, y es indudable que la Oficina de Intereses norteamericana en La Habana no ha actuado de manera inocente. De hecho, ha agudizado la situación con unas prepotentes declaraciones de su máximo representante, James Cason, antes, durante y después de los procesamientos. Muy poco tendrá que agradecerle la futura democracia cubana a la temeridad de este diplomático, ni siquiera los propios disidentes, que se han visto jalonados entre la inmunidad de la diplomacia norteamericana y la impunidad del gobierno cubano. Lo que desconcierta es por qué

no se expulsó al representante diplomático en cuestión, dado que había pruebas suficientes sobre su conspiración. La opinión de buena parte de la izquierda internacional —en medio de una guerra que elevó las cotas de impopularidad de Estados Unidos a gran escala— hubiera aceptado de buen grado esta opción, pero desde luego no ha tolerado los fusilamientos y las detenciones. No al menos en el siglo XXI, donde la figura jurídica de «delitos de opinión» es tan arcaica y tenebrosa como lo fue la Inquisición a la luz de la Ilustración.

Un segundo error cometido por La Habana ha sido, posiblemente, de alineamiento. Si en eso que eufemísticamente llamamos Nuevo Orden Mundial, la persistente dicotomía entre el Bien y el Mal o las andanadas ideológicas de George W. Bush poseen la rémora de la Guerra Fría, alianzas tan inusuales como la de Francia, Alemania, China y Rusia, o las formidables manifestaciones de los últimos meses, estarían entre los usos posibles de una nueva política global. Llama la atención el hecho de que Cuba se alejara de unos y otros, al optar por un enclaustramiento preocupante y manejarse en la misma dimensión política de sus enemigos más constantes. Un ejemplo elocuente es el Proyecto Varela, posiblemente el más conocido y significativo en la historia de la disidencia en Cuba. Su inspirador, Oswaldo Payá Sardiñas, ha obtenido el Premio Sajarov de la Comunidad Europea y es un serio candidato al Premio Nóbel de la Paz. Este proyecto consiguió —con lo que esto significa en las condiciones de la política insular— más de 11.000 firmas con el objetivo de promover un referéndum pacífico hacia una apertura democrática desde el propio marco de la constitución cubana. ¿Cuál fue la respuesta del régimen cubano? Decretar, incluso contra su propia constitución, que el socialismo es «inamovible». ¿Cómo respondieron los residuos macartistas de la extrema derecha en Miami? Con una marcha contra el Proyecto Varela por considerarlo demasiado blando con el régimen socialista. No hacen falta comentarios.

No es ocioso apuntar, en esa línea, que en el momento en que se desata esta crisis, se negociaba en el congreso norteamericano el ablandamiento del embargo y se abrían las posibilidades de compras cubanas a Estados Unidos mediante un acuerdo sin precedentes en las últimas cuatro décadas. Pues bien, ese fue el momento exacto escogido por la diplomacia norteamericana, la ultraderecha cubanoamericana de Miami y el gobierno cubano para alinearse en la Edad de Piedra (del Muro de Berlín), reafirmando los pilares que han constituido durante medio siglo la historia extrema de ese país: Patria o Muerte, Conmigo o Contra Mí, Intransigencia o Diálogo.

La quiebra de esa lógica extrema es la que marca, precisamente, la diferencia en la actual posición de la izquierda occidental. Incluso, desde las posiciones más próximas al gobierno cubano, establecidas en una carta promovida desde México y leída este 1 de mayo en plena Plaza de la Revolución —con la firma entre otros de Harry Belafonte, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, Adolfo Sánchez Vázquez o Adolfo Pérez Esquivel—, la condena a una posible invasión norteamericana no suscribe, en ningún momento, ni los fusilamientos ni la represión a la disidencia. Eduardo Galeano, que también ha firmado ese manifiesto, fue explícito al respecto, y recordó a los cubanos la famosa frase de Rosa Luxemburgo en su polémica con Lenin: «La libertad es siempre la libertad para el que piensa diferente». Estas posiciones de la izquierda de Europa, Estados Unidos y América Latina, parecen decir lo

siguiente: Cuba no está ni estará sola ante una posible invasión de Estados Unidos, pero sí estará cada vez más sola ante sus propias arbitrariedades. No estará sola frente a su poderoso enemigo externo pero estará aislada ante la represión a sus críticos internos, no estará sola a la hora de enfrentar los demonios ajenos pero sí lo estará ante sus propios demonios.

En una era global como la que vivimos, con una pretensión de estandarización tan descomunal, la diversidad es una virtud, pero el aislamiento es una irresponsabilidad. Si la independencia absoluta es hoy un eufemismo —¿cómo puede proclamarse independiente un país que tiene como una de sus principales fuentes de ingreso a las remesas de sus exiliados y donde una moneda que no es la suya marca de manera tan contundente toda la vida cotidiana?— no es imposible alcanzar una interdependencia digna. Rusia y China no son precisamente ejemplos de virtud democrática, pero Francia y Alemania consiguieron aliarlas en contra de la guerra de Irak.

Es cierto que, por el norte, los ecos que llegan a la isla desde el gobierno norteamericano no son nada edificantes. Desde el sur, en cambio, un amplio frente de izquierda liderado por el Partido de los Trabajadores ha llevado a Luiz Inacio «Lula» Da Silva al gobierno de Brasil. Desde Europa del Este, los excomunistas han ganado las últimas elecciones en Polonia y, quién lo diría, Solidaridad se ha quedado sin representación parlamentaria. Uno y otro se han servido de la democracia para rearticular sus políticas de izquierda en esta época. Y por más que el polpotismo de un sector emergente de la intelectualidad cubana se empeñe en ofrecer, si fuera menester, la cobertura ideológica de un país cerrado a cal y canto donde impere la unanimidad y la sospecha, Cuba no es ajena a esos emplazamientos globales. El turismo, la apertura al dólar y al euro, la incipiente economía de mercado, la han convertido en un país poliédrico donde el socialismo convive con zonas controladas de capitalismo de Estado. Dentro del campo de posibilidades que ofrece esta situación, la isla aparece, según el caso, como el paraíso del sexo o la última Tule del comunismo, como el último bastión de la dictadura del proletariado o la terapia ideal para neuras y fantasías occidentales. Hoy coinciden por allí la misa del domingo, el nuevo empresario, el colonialista español y el inversor norteamericano con las tribunas encendidas de consignas revolucionarias. Todo ello sitúa a los cubanos —como en un Aleph tropical— frente a toda su historia: la colonial, la neocolonial, la republicana, la revolucionaria, la posrevolucionaria. En el futuro cifrado por este mosaico son varias las posibilidades que se le abren al porvenir de la isla: desde el socialismo inamovible que se encapsula en sí mismo hasta el neoliberalismo salvaje que se disuelve en sí mismo; desde transformaciones balanceadas con la continuidad hasta la ruptura más abrupta de la terapia de choque a la rusa (ese cóctel siniestro que mezcla a la vieja «nomenclatura» y las nuevas mafias); desde el pobre futuro de un país caribeño dependiente de la remesa de sus familiares hasta el futuro caótico de un país poscomunista incapaz de controlar los demonios que ha desatado. En esta situación, la represión a los que ejercen el humano y fisiológico derecho de disentir no anulará, necesariamente, el retorno del capitalismo en Cuba. (Lo que ha pasado en algunos países de Europa del Este nos ha mostrado el rostro más cínico del oportunismo, con los antiguos delatores y represores como adalides actuales del nuevo dogma neoliberal). Lo que realmente se hipotecará, con todas sus consecuencias, es

una posibilidad para la izquierda cubana en un porvenir democrático. Esa izquierda podría ser —empieza a ser— tan diversa como la propia izquierda occidental que hoy se ha manifestado sobre los últimos y muy graves acontecimientos en Cuba y el mundo. Y habita en las laderas del gobierno cubano y en sus intelectuales orgánicos, pero también en la disidencia, la prisión y el exilio. Con respecto a esta izquierda futura, los cambios de perspectiva vividos durante estos días han significado también el reconocimiento de que, en la era global, la izquierda tiene una batalla importante en la profundización de la democracia, en todas sus magnitudes, y no en el desprecio por ella. Obviar esta posibilidad sería regresar a la simetría con el Gulag, gravitar en el destino manifiesto acotado por una derecha pre-Berlín tan anacrónica como los estados estalinistas que la enfrentaron. Desde esta última opción, los argumentos que se nos lanzan tienen el tono antiguo de las lenguas muertas. Son, acaso, el eco de una voz apagada en los agujeros negros de la Guerra Fría.

[*La Vanguardia*, BARCELONA, 19-05-03]